

Autorizaron en Chile la planta celulósica de Botnia

(Montevideo, 9 de noviembre de 2007) En la jornada de este jueves en Chile se dio a conocer oficialmente la decisión de otorgar la habilitación a Botnia para poner en funcionamiento su planta en Fray Bentos, sobre la margen oriental del Río Uruguay. Botnia tiene plantadas unas 140 mil hectáreas de eucaliptos y planea producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa en lo que será una empresa celulósica gigante para Uruguay pero no la única. Existen cinco proyectos más anunciados oficialmente (de las empresas ENCE de España, Stora Enso de Suecia-Finlandia, Portucel de Portugal, International Paper de Estados Unidos y Nippon Paper Industries de Japón). Otra compañía, la estadounidense Weyerhaeuser, con más de 140 mil hectáreas forestadas con pinos y eucaliptos, ha deslizado en varias oportunidades que no descarta la posibilidad de construir una planta de celulosa. Uruguay se convertirá así en el basurero de la producción de celulosa del mundo.

Más allá de las consecuencias ambientales que las instalaciones de Botnia puedan traer, lo que se pone en jaque es el proyecto de un modelo de desarrollo sustentable. Este modelo forestal celulósico conduce a la escasez de agua en las zonas con plantaciones de árboles, al deterioro del suelo, a una creciente latifundización y extranjerización de la tierra y al éxodo campo-ciudad de los pequeños productores rurales.

Los monocultivos consumen una gran cantidad de agua subterránea y reducen su caudal al extremo, como ha sido denunciado en Rocha, Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Paysandú, Lavalleja. En el caso más emblemático, los chaceros de Mercedes denuncian la escasez de agua en sus tierras desde 1995. Como consecuencia de ello, unas 150 familias deben ser asistidas por camiones surtidores de agua potable de la Intendencia de Soriano, los cuales no llegan a cubrir de todos modos las necesidades de los productores. A esto se suma la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan en las plantaciones y que contaminan el agua.

También se ha denunciado en varias oportunidades las paupérrimas condiciones laborales de los trabajadores forestales y la ilusión de crecimiento laboral que crean las empresas del sector, que en realidad emplean mucha menos mano de obra que otros sectores del agro.

El proyecto de Botnia lesiona la ciudadanía del pueblo uruguayo, que tendrá escasas posibilidades de que se tomen en cuenta sus demandas contra la empresa en caso de contaminación, por la vigencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de Uruguay y Finlandia, que beneficia a la compañía.

A poco más de una semana de realizados los comicios presidenciales en Argentina y a espaldas a la cumbre de presidentes, el gobierno uruguayo otorga la autorización

a Botnia. Lo hace luego de una extensa agonía, pautada por un conflicto binacional sobre el cual se buscó centrar la atención, dividiendo los ánimos de las ciudadanías de uno y otro país con un tinte xenófobo que poco ha ayudado a discutir las cuestiones de fondo a las que arriba referimos. Desde la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos en Chile nuestro país sentenció de muerte al Uruguay Natural y al modelo productivo sustentable basado en la equidad social.

REDES-AMIGOS DE LA TIERRA URUGUAY



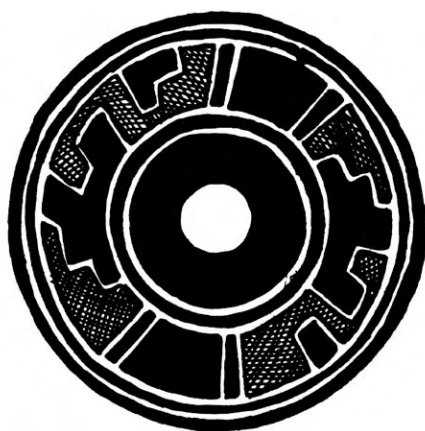
Agua con petróleo

Hay amplia evidencia de que los estándares ambientales en Canadá y México se desplomaron desde que el TLCAN entró en vigor en 1994 y la situación podría empeorar con el TLCAN-Plus, expuso Andrew Nikiforuk, autor de un informe sobre el problema del agua y la integración de Norteamérica.

Según Nikiforuk, la mayor parte del petróleo canadiense procede de las arenas alquitranadas, un proyecto de 125 mil millones de dólares en los bosques boreales de la meridional provincia de Alberta. Un millón de barriles de petróleo fluyen hacia el sur cada día, convirtiendo a Canadá en el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos.

Sin embargo, para producir un barril de petróleo en las arenas alquitranadas se gastan tres barriles de agua, y el proyecto en Alberta ya consume 359 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para una ciudad canadiense de dos millones de habitantes. Además, 90 por ciento de ese recurso se contamina en la producción petrolera.

Nikiforuk añade que miembros del Grupo de Trabajo Norteamericano sobre Energía de la Security and Prosperity Partnership (SPP, o Alianza para la Seguridad y la Prosperidad), han propuesto quintuplicar la producción petrolera en las arenas alquitranadas. “El respetado analista en materia de energía Matthew Simmons afirma que Canadá debería dejar de impulsar la adicción de Estados Unidos a los combustibles fósiles”.



Ecuador, Correa y ¿una resistencia a la minería?

De ninguna forma se está planteando que Ecuador sea un país libre de minería a gran escala o expulsar a las transnacionales, o la terminación de las concesiones. No nada de eso. Según el gobierno hay que implementar más control y recaudar más a las transnacionales por medio de regalías, aumentar el precio de las patentes, ponerles plazo a las concesiones, reparto a gobiernos locales de las ganancias. El mensaje: transnacionales mineras quédense pero déjenos más recursos, continúen y para callarlos a los posibles “conflictivos” hay que darles parte del pastel—sean juntas parroquiales, municipios. Es la diplomacia de las transnacionales mineras.

En materia ambiental sigue predominando el interés de las mineras. Los derechos de las comunidades se relegan a que se reconozcan los pasivos ambientales (destrucción y contaminación). Que exista la remediación, que haya consulta a la comunidad, dice el ABC de la minería. Pero a larga es un fraude: primero no se da la consulta como tal ya que las comunidades son mironas, convidadas de piedra sin capacidad de decisión. Y si ocurriera, ¿se imaginan la campaña de las transnacionales?, el soborno (sería una estafa como las elecciones), y luego no es que las comunidades deseen la “consulta” sino que las transnacionales la buscan como necesidad para entrar a explotar. Esto es un pasatiempo y una trampa. Aquí ya no se discute la defensa de la vida y la naturaleza sino el precio de la vida (pasivos ambientales, la mitigación, las indemnizaciones). Eso es la “célebre consulta”, estrategia para seducir a las comunidades con la supuesta riqueza, con dólares, son los espejos del siglo XXI.

Entonces, para promover la resistencia frente a las transnacionales mineras hay que considerar:

* Si toda actividad humana causa impacto ambiental, la minería a gran escala (cielo abierto, túneles u otras técnicas) es un aprovechamiento industrial. No habría ninguna diferencia en impactos ambientales o en destruc-

ción y contaminación ambiental si esa explotación es llevada por multinacionales o por el Estado.

- * Una cosa es nacionalizar y otra muy distinta poner más control e imponer más gravámenes a la utilidad de las transnacionales. La nacionalización es que pase a ser propiedad bajo administración estatal, aunque aquello esté lejos de ser parte de un plan socialista. Permitir que continúen las transnacionales con más inspección estatal es capitalismo “no neoliberal”, capitalismo en fin.
- * Los derechos colectivos no deben reducirse a formalidades como el derecho a ser consultados. Implica una decisión, no sólo información. El reconocimiento de los derechos colectivos no implica que se reconozcan los daños al medio ambiente para luego ponerles precio sino prevenirlos y evitarlos, impedirlos.
- * El dialogo es entre iguales y entre los que tienen un mismo modo de vida y objetivo. Entre intereses contrapuestos lo que se puede llegar es a un pacto y ello implica ceder u obligarle a permitir tal cosa a una parte. Existen dos mecanismos para ceder: la fuerza (juicios a los dirigentes, represión) y la división, el engaño, la ilusión, la charlatanería para desmovilizar a una parte confiando en que todo se solucionará y luego el cachiporrazo final: terminar conciliando con las transnacionales y cuando el pueblo se dé cuenta ya será tarde. Cuál de las dos es la estrategia del gobierno.
- * Suspensión no es extinción. Suspender una concesión no significa que se acabó la amenaza. Con la suspensión hay que cuidarse el doble, la reacción o contragolpe de las transnacionales no se hace esperar.
- * Sigue manteniéndose que la explotación minera o petrolera (privada transnacional y en menor medida estatal) “es de prioridad nacional”, “indispensable para el desarrollo”, tan pobretones que no tenemos otro arte y beneficio que no sean las actividades extractivas u otras actividades que las que tenemos son de poca monta “primitivas, subdesarrolladas”. Entonces desde afuera y los que tienen dinero nos van ayudar; ése es el discurso del señor Correa con el Yasuní, más o menos da a entender ¿de dónde saco dinero?

¿Se deja todo intacto o se accede a la riqueza mineral que en el país bordea los 200 mil millones de dólares? El dilema es latente para el Mandatario: “Si hay esos ingresos se va a tener que permitir que esa minería vaya en beneficio del desarrollo del pueblo ecuatoriano”, declaró. Finalmente, advirtió que la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní correrá la misma suerte, si no hay respuesta de las contrapartes internacionales en compensar la no explotación.

Resumen de algunos fragmentos de “Ecuador: luz verde a las transnacionales mineras”, de Vicente Vivanco, Coordinadora Nacional por la Vida y la Soberanía (coor_nacionaldvs@yahoo.es)

Segunda Reunión del Órgano de Gobierno del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

Declaración de la Sociedad Civil

Las organizaciones campesinas, de pueblos indígenas y ONG, cuya participación ha sido financiada por la propia sociedad civil sin apoyo de los gobiernos ni del Tratado, se dirigen a los miembros del órgano de gobierno del Tratado.

Recuerdan que

1. Las/los campesinos/as no pueden garantizar la continuidad de su indispensable contribución a la conservación y a la renovación de la biodiversidad sin el reconocimiento y el respeto de sus derechos de sembrar, conservar, proteger, intercambiar y vender sus semillas y de acceder libremente a los recursos genéticos. Las semillas producidas en el campo y sus intercambios informales están en la base de esta contribución y por desgracia están prohibidos en muchos países firmantes del Tratado. Es deber del Tratado asistir a los Estados a implementar una legislación conforme a esos derechos. Solicitamos que sea creado a nivel del Tratado un grupo de trabajo encargado de definir las líneas directrices para la aplicación por parte de los Estados de legislaciones conformes a ello.
2. Los/las campesinas/os no conservan, no renuevan y no seleccionan variedad vegetal alguna ni ninguna raza animal fuera de los sistemas sociales, económicos y culturales en los que desarrollan sus producciones. Los derechos de las/os campesinas/os incluyen al conjunto de estos sistemas de intercambio, a la tierra, el agua, los animales, los saberes, y no sólo a los recursos fitogenéticos. Las/os campesinas/os no conciben poseer los seres vivos, los piden prestados a sus hijos/as. Los derechos de los campesinos y cam-

pesinas no deben reducirse a derechos individuales de propiedad privada, que en realidad son lo opuesto a sus derechos. Los derechos campesinos son derechos colectivos relacionados con el acceso a los recursos y el uso que de ellos se hace, tal como lo considera la esencia del Tratado.

Las organizaciones piden que

1. se establezca un proceso de consulta y de discusión que permita la participación efectiva de campesinos/as, del conjunto de productores/as de alimentos (pueblos indígenas, pescadoras/es, ganaderos, nómadas...) y de sus organizaciones, en el conjunto de decisiones relativas a los recursos fitogenéticos a nivel del Tratado y en particular en el trabajo sobre los derechos campesinos.



2. se revisen las legislaciones que ponen trabas a los derechos campesinos, incluidos los derechos de sembrar, conservar, proteger, intercambiar y vender sus semillas.
3. la conservación de los recursos genéticos *in situ*, en el campo, y los trabajos de selección participativa asociados se benefician del mismo apoyo financiero de la comunidad internacional que la conservación *ex situ*. Éste no podría ser reducido a las sumas que jamás podrán ser recuperadas mediante mecanismos de reparto de beneficios resultantes de derechos de propiedad intelectual provenientes de la utilización de recursos canalizados a través

del sistema multilateral, más aun cuando esos derechos de propiedad son a menudo una traba a los derechos de las/os campesinas/os. Los Gobiernos no pueden firmar el Tratado y después negarse a dedicar los recursos necesarios para su funcionamiento y su aplicación. Una respuesta responsable podría ser un mecanismo de impuestos sobre los intercambios comerciales de semillas.

Sin una decisión de los Estados que permita asegurar efectivamente el funcionamiento del Tratado, las organizaciones sugieren que éste sea suspendido, al igual que los intercambios de recursos genéticos que facilita.

Las organizaciones agradecen al Secretariado del Tratado su voluntad de diálogo y le sugieren que lo mantengan de forma estable, regular y abierta, con el fin de respetar nuestras responsabilidades recíprocas.

Roma, 31 de octubre de 2007

Organizaciones Campesinas y de Pueblos Indígenas:

Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica-aiab, Italia. anopaci, Costa de Marfil. Asociacion Nacional de Agricultores Pequeños, Cuba. Associazione Rurale Italiana, Italia. Asia Pacific Indigenous Youth Network. Confédération Paysanne, Francia. Coordination Nationale des Organisations Paysannes, Mali. Coordination Paysanne Européenne, Burkina Faso. ehne, Euskal Herria. Farmer Consultative Council, Filipinas. Mocase, Argentina. Movimento dos Pequenos Agricultores, Brasil. Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Réseau Semences Paysannes, Francia. Seeds, Filipinas. Via Campesina. ONG: AS-PTA, Brasil. Cenesta, Irán. Centro Internazionale Crocevia, Italia. CEPA, Mali. Commitech. Zimbabwe Development Fund, Noruega. Grupo ETC. Group EOSA, Etiopía. GRAIN. Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical, Venezuela. Practical Action/ITDG, Reino Unido. SEARICE, Filipinas.



Las Heras

El modelo genocida del glifosato

Reunidos en Las Heras, provincia de Buenos Aires, profesionales de la salud, abogados, biólogos y activistas, luego de escuchar los testimonios de médicos y afectados, y de analizar los documentos sobre los daños causados a personas, animales y a la biodiversidad por las pulverizaciones aéreas con glifosato, en el conocido Plan Colombia, y de sus efectos “colaterales” en la frontera ecuatoriana. Habiendo comprendido que la manipulación genética de la soja RR tiene como único objetivo promover el uso del herbicida “glifosato”. Habiendo considerado las pruebas del verdadero genocidio del campesinado paraguayos por parte de invasores que los expulsan violentamente de sus tierras para implantar el modelo agroindustrial centrado en el “diseño biotecnológico” de la soja RR, y por supuesto, del glifosato. Tras analizar estudios de casos en Argentina, donde la soja RR catapultó el uso de glifosato a niveles nunca imaginados, generando la aparición en “el paquete tecnológico” de la siembra directa de malezas resistentes, que a la vez llevan a la utilización de otros herbicidas —como el 2,4 D; el paraquat; misil, etcétera. Luego de comprobar que con la siembra directa se ha incrementado la aparición de nuevas plagas y enfermedades, que son causa de la utilización de una “batería” de agrotóxicos jamás utilizados en ese país y luego de revisar la abundante bibliografía mundial sobre los efectos perniciosos del glifosato sobre los seres vivos y descubriendo el ocultamiento y desinformación a la que se somete la opinión pública y particularmente a los sectores productivos y académicos, los participantes del Primer Encuentro Internacional sobre la Problemática del Glifosato.

Declaramos

Que está sobradamente probada la sinergia entre el diseño biotecnológico y el aumento exponencial del empleo del glifosato, junto con una gama indefinida de agrotóxicos que en su conjunto forman el modelo agroindustrial de producción de mercancías.

Que está probada la toxicidad del glifosato y de sus formulaciones, en especial Round Up (Round Up Ultra, Full-Max, etcétera).

Que queda probada la existencia de casos de graves daños en pobladores causados por las pulverizaciones “anti droga” en el marco del Plan Colombia y sus derivaciones sobre el país vecino Ecuador, que a su vez elevará a Tribunales internacionales este caso.

Que queda probada la mala fe que lleva a la presentación del glifosato como un agro químico “inocuo” y “bebible” “ligeramente tóxico” y que esta forma de argumentos son de una gran perversidad.

Que queda probada la inoperancia e incapacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la legislación que cada país tiene sobre la aplicación de agrotóxicos.

Que los campesinos del Paraguay, en especial del Alto Paraná, están gravemente afectados por el uso del glifosato. El modelo de monocultivo extensivo de soja que implantan las multinacionales y poderosos sojeros, mayoritariamente brasileños, requiere el uso masivo de tecnología transgénica y del paquete de agrotóxicos. Las consecuencias de aplicar este modelo son la expulsión de los campesinos paraguayos de sus tierras, la destrucción de las formas tradicionales de producción de alimentos, el daño a la salud de las poblaciones, la contaminación y empobrecimiento de la tierra y el ambiente.

Por todo ello demandamos

Que se haga una investigación en el seno del sistema de Naciones Unidas y sus relatores especiales, sobre los impactos generados por el modelo tecnológico de la soja transgénica con resistencia a glifosato en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Que se incorpore en las negociaciones del régimen internacional sobre responsabilidad civil y compensación en el marco del “Protocolo de Cartagena”, al modelo tecnológico de la soja RR.

Que se revise la clasificación toxicológica del glifosato y que sea considerado “extremadamente tóxico”.

Que se investigue y castigue los responsables de los atropellos hechos a los campesinos paraguayos por el sector sojero, y que cese la criminalización de la lucha de los campesinos paraguayos por parte de las autoridades.

Apoyamos

La demanda del gobierno de Ecuador contra el modelo de aspersiones aéreas con el paquete herbicida que incluye glifosato, en la frontera colombo-ecuatoriana.

Apoyamos las demandas del pueblo colombiano contra el modelo de aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos, con el paquete herbicida que incluye glifosato.

Apoyamos la resistencia del pueblo campesino paraguayo a través de Asagraba (Asociación de Agricultores de Alto Paraná) y nos comprometemos a cooperar solidariamente en su justa lucha.

Santa Elena, Las Heras, 11 de noviembre 2007

